

La tragedia colombiana: guerra, violencia, tráfico de droga¹

Daniel Pécaut²

Resumen

Después de presentar algunas indicaciones sobre la situación actual del conflicto el autor lleva a cabo un recuento de algunos elementos relacionados con la violencia de los años cincuenta en Colombia para, en seguida, esbozar algunas de las más importantes características de la violencia actual: el auge de la economía de la droga, los actores comprometidos, los recursos económicos en juego, el carácter prosaico del enfrentamiento, la presencia o ausencia de un imaginario. Frente a este panorama, concluye, la alternativa sería, o bien un compromiso serio de negociación, o bien un agravamiento de la guerra que podría dar lugar a una guerra civil.

Abstract

Following a presentation of some indicators related to the prevailing conflict in Colombia the author analyses some of the important features of the current violence in relation to the violent upheavals in the society during the decade of the Fifties. The present situation is aggravated by the sheer magnitude of the drug trade, by the various actors involved, and by the illegal economic resources available. Given this scenario it is concluded that the outcome should be a definite commitment to serious negotiations, or alternatively the conflict will soon become a full scale civil war.

Palabras claves: Colombia, violencia y conflicto, economía de la droga, guerra.

¹ Artículo publicado en la revista Hérodote Revue de géographie et de géopolitique, 4 trimestre 2000 No. 99 Paris. Traducción de Renán Silva y Alberto Valencia G. profesores Departamento de Ciencias Sociales Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad del Valle.

² Director de estudios en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París.

Desde hace cerca de veinte años Colombia es de nuevo escenario de fenómenos de violencia de una intensidad comparable a una situación de guerra. Las cifras así lo muestran. Colombia, con 40 millones de habitantes, se encuentra entre los países que presentan el mayor número de pérdidas de vidas humanas: más de 25000 homicidios por año, es decir, una tasa de 70 muertos por cada 100.000 habitantes. El número de secuestros, que en este momento sobrepasa los 3000 por año, constituye todo un récord en el planeta. El terror, que afecta numerosas regiones, produce desplazamientos masivos de población. El total de desplazados se estima en 1.800.000, lo que hace de Colombia, igualmente, uno de los casos más graves.

La situación de violencia es, por lo demás, una de las más complejas. No es el resultado de enfrentamientos “identitarios” (étnicos, religiosos o regionales); posee, ciertamente, un eje político, en la medida en que se encuentra ligada en buena medida a la acción de las guerrillas revolucionarias y de las fuerzas que enfrentan a la guerrilla (el ejército y las poderosas organizaciones de “autodefensa” o paramilitares); pero existen también otras dimensiones que interfieren con este eje político. En primer lugar, el cultivo y el tráfico de droga, que repercute tanto sobre el contexto institucional y social como sobre las propias modalidades de la confrontación armada. En segundo lugar, el crecimiento de las bandas armadas que controlan buena parte de los barrios populares urbanos. Y, finalmente, la desorganización social, que favorece el uso de la violencia como forma de zanjar cualquier litigio cotidiano. Todos estos aspectos, que repercuten entre sí, han terminado por producir una serie de dinámicas que escapan ampliamente al control del Estado. No se puede hablar, sin lugar a duda, de hundimiento de las estructuras del Estado, como ocurre en otros casos de violencia generalizada; pero, de hecho, la autoridad del Estado se encuentra particularmente debilitada y ya no se ejerce en gran parte del territorio.

La degradación de la situación colombiana la está llevando poco a poco a su internacionalización. La injerencia de los Estados Unidos no es un hecho nuevo, pero hasta el momento se había limitado solamente a la cuestión de la droga, considerada como problema de “seguridad nacional”. Sin embargo, el Plan Colombia que acaba de ser aprobado por el Congreso Norteamericano, significa una reorientación de su política. Si bien la voluntad de erradicar los cultivos de coca, que siguen en expansión constante durante los últimos años en todo el territorio colombiano continúa siendo su justificación principal, por primera vez se incluye una ayuda a las Fuerzas Armadas que, dada la implantación de vieja data de las guerrillas o la presencia reciente de las autodefensas en las regiones de cultivos, amenaza con comprometer directamente a los Estados Unidos en los conflictos internos del país. La adopción de este plan expresa la preocupación que mantiene este último país por las repercusiones que puede tener la crisis colombiana sobre los países vecinos: Ecuador, Perú, y Venezuela, pero también, y sobre todo, Panamá.

El contexto anterior de la violencia

Los comentaristas de la situación colombiana se refieren con alguna frecuencia al carácter recurrente de los fenómenos de violencia en el país, hasta llegar a considerar la violencia como un hecho consubstancial a la historia de Colombia. Los colombianos, en una gran mayoría, están convencidos de que la tragedia actual no es más que la continuación de las diversas guerras que han sacudido al país desde el siglo XIX.

Esta constatación no deja de ser paradójica en la medida en que Colombia ha presentado, al menos durante el siglo XX, una particular estabilidad institucional; ha ignorado casi totalmente los golpes de Estado militares (incluso en las décadas del sesenta y del setenta); y nunca ha dejado de reclamarse del Estado de derecho y de la democracia. Colombia, desde luego, presenta desigualdades sociales que se pueden considerar como una de las más pronunciadas del Continente y jamás se ha empeñado en impulsar reformas profundas para atenuarlas; en este país, igualmente, se ha desarrollado un clientelismo que limita el alcance de las proclamas democráticas y, en diversos períodos, se han impuesto fórmulas políticas que constituyen verdaderos obstáculos para que se conforme una verdadera oposición, como es el caso, en particular, del sistema llamado “Frente Nacional” que, entre 1958 y 1974, otorgó un monopolio político a los dos partidos “tradicionales”, el partido liberal y el partido conservador.

Estos elementos, sin embargo, no son suficientes para explicar la apreciación de la situación que manifiestan tantos colombianos. Existen otros tres factores que son igualmente importantes. Desde mediados del siglo XIX, los dos partidos llamados tradicionales dieron nacimiento a dos verdaderas subculturas, que se implantaron sobre todo el territorio, y a una representación de la política fundada sobre una división “amigo-enemigo” que la Iglesia católica, casi siempre solidaria con los conservadores, consideró en muchas ocasiones como una oposición que comprometía valores fundamentales. Si bien en muchas oportunidades los dos partidos se lograron poner de acuerdo para compartir el poder, solo en los años sesenta la violencia inherente a sus rivalidades se detuvo realmente.

El encuadramiento de las clases populares no ha sido obra primordial del Estado sino de las innumerables redes asociadas con estos partidos políticos. Su dominación, si bien se ha basado casi siempre en las fidelidades voluntarias de la población de las zonas rurales, en muchos casos ha recurrido también al uso de la fuerza. Incluso en las regiones mejor integradas a la economía nacional, como las zonas de cultivo de café, numerosos son los casos de pueblos que estuvieron sometidos durante décadas al poder arbitrario de jefes políticos locales. *A fortiori*, lo mismo había ocurrido en amplias zonas del territorio progresivamente ocupadas a lo largo del siglo XX por olas sucesivas de colonos y en las cuales, ante la ausencia de un aparato de justicia y de policía, los habitantes habían quedado al capricho de toda clase de intermediarios políticos que no habían vacilado en utilizar los métodos más violentos.

Tanto el arraigo de las subculturas políticas como el control ejercido por parte de las redes locales de poder han contribuido para que la imagen de la unidad de la Nación haya sido siempre precaria. Sobre el trasfondo de una geografía que hacía difícil las comunicaciones, la política ha contribuido a la fragmentación del poder. Colombia no ha conocido ningún movimiento nacionalista de envergadura y los movimientos populistas han sido de corto alcance³. El propio Estado ha estado siempre revestido de una autoridad muy precaria. Las elites civiles se han puesto de acuerdo para limitar sus prerrogativas con el fin de mantener más cómodamente la tutela sobre la gestión económica y social. Independientemente de las doctrinas de las que se reclaman, las elites lograron imponer en los hechos una concepción liberal que reduce el Estado al cumplimiento de las funciones que ellas simplemente no podían realizar por si mismas. Los militares, profesionalizados tardíamente, dotados de medios limitados, condenados por el poder civil a funciones de policía, no han contado con condiciones propicias para alimentar ambiciones propias, ni siquiera una visión geopolítica del control de las zonas fronterizas. Las clases populares, por su parte, han manifestado habitualmente una inmensa desconfianza con un Estado que no les garantiza el acceso a una ciudadanía social y, en muchas ocasiones, han desarrollado una especie de anarco-liberalismo, que ha conducido a cada sector a intentar por su cuenta la conquista de todas las ventajas posibles.

Estos factores, que se inscriben en la larga duración, han favorecido la complementariedad que, para la definición del orden político, se ha establecido con frecuencia entre las reglas de derecho y del uso de la violencia; sin embargo, es poco probable que hubieran sido suficientes para convencer a muchos colombianos de que su país estaba condenado a la violencia. Para ello fue necesario un episodio particular, designado precisamente con el nombre de *Violencia*, que entre 1946 y 1960 produjo un verdadero traumatismo colectivo. En su origen una guerra clásica de dos partidos por el poder, el desarrollo de la confrontación nunca perdió este carácter partidista, pero revistió al mismo tiempo cuatro figuras diversas: una revancha social de las elites como resultado del gran terror que siguió a los motines populares que se produjeron luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, particularmente el *Bogotazo*; un proceso de acumulación salvaje en las regiones de economía cafetera en provecho de una mediana burguesía, que se sirvió de la violencia para controlar los procesos de acumulación y de comercialización; una

³ Dos movimientos de importancia se pueden mencionar. El primero es el movimiento gaitanista (que toma su nombre del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, quien intentó crear en 1946 una vasta coalición “antioligárquica”). Después de su derrota en las elecciones de 1946, Gaitán regresa al partido liberal, del que llega a ser jefe, sin renunciar a su denuncia de las oligarquías políticas. Su asesinato, el 9 de abril de 1948, dio lugar al *Bogotazo* (cfr. más adelante). El segundo es el movimiento del general Rojas Pinilla. Llevado al poder por un golpe de Estado en 1953, fue derrocado por las elites en 1957. El movimiento que el general Rojas lanzó en los años sesenta, próximo en sus comienzos del partido conservador, terminará por seducir a una buena parte de los sectores más desfavorecidos. Candidato a la elección presidencial de 1970, bien parece que sólo el fraude impidió su triunfo.

guerra fratricida entre los campesinos de los dos partidos, con un nivel de atrocidad comparable al de la guerra civil española; una resistencia campesina tardía que oscilaba entre las formas políticas y el bandidismo a gran escala. La *Violencia* dejó muchas huellas, no solamente porque presenta un balance de 200 mil muertos y centenas de miles de desplazados, sino también y, sobre todo, porque constituyó, para amplios sectores campesinos, una experiencia imborrable de humillación cuando con posterioridad se dieron cuenta que se habían enfrentado por una causa que no era la suya, sino la de las elites, en el momento en que éstas últimas decidieron reconciliarse en el marco del Frente Nacional y lanzaron un manto de olvido sobre los acontecimientos pasados, tratando de sacar provecho, al mismo tiempo, de la desorganización de las clases populares, para afianzar mejor su supremacía.

La *Violencia* es, pues, un acontecimiento que modifica completamente las representaciones de la historia de numerosos colombianos. Ante la ausencia de un juicio de responsabilidades, incluso, de una manera más simple, de la inscripción de este suceso en un relato histórico compartido, la memoria de la *Violencia* se ha transmitido de generación en generación y ha llegado hasta las ciudades a través de las migraciones. Manuel Marulanda Vélez, el jefe actual de la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC⁴), partícipe de la resistencia campesina comunista desde 1950, simboliza la persistencia de esa memoria hasta el momento actual. ¿Explica este hecho el nacimiento de las guerrillas revolucionarias en los años sesenta y el reanudación de la violencia a gran escala en los años ochenta? Afirmarlo sería desconocer, entre otras cosas, las discontinuidades profundas que existen entre estas dos fases.

Las cuatro principales organizaciones guerrilleras que han estado en el primer plano del escenario del conflicto entre 1989 y 1990 aparecieron, ciertamente, en los años posteriores a la *Violencia*. Es innegable, además, que las FARC encontraron apoyo en las zonas de autodefensa campesina que habían surgido en la década anterior y que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) buscaron establecerse en las zonas campesinas marcadas por esta experiencia. Es probable, igualmente, que esa experiencia haya favorecido la difusión, entre las clases medias urbanas, del argumento según el cual la lucha armada era la única vía para oponerse al régimen. No hay que olvidar que ese momento está marcado sobre todo por el éxito de la Revolución Cubana y el ascenso de las nuevas extremas izquierdas: las FARC se situaron en el campo de influencia del partido comunista ortodoxo; el ELN se reclamaba del guevarismo; el EPL del maoísmo; y solamente la última guerrilla en aparecer, el M 19⁵, que solo entra en escena en los años setenta, pretende escapar a estas divisiones internacionales por

⁴ En 1982, las FARC agregaron a su sigla las letras EP (Ejército Popular) para expresar el paso a una nueva fase de la lucha armada.

⁵ Movimiento 19 de abril. El 19 de abril es la fecha de las elecciones en las que el fraude parece haber privado al general Rojas Pinilla de su triunfo. Una parte de los dirigentes de la nueva organización provenía del movimiento populista que el general dirigía.

medio del llamado a un nacionalismo más abierto y apelando a la solidaridad con los movimientos centroamericanos.

Hoy en día ha llegado a ser lugar común afirmar que el surgimiento de las guerrillas marca el comienzo del conflicto actual y hablar de “una guerra civil que dura desde hace treinta y cinco años”. Sin embargo, esta afirmación es una concesión excesiva a la historia legendaria que las FARC y el ELN -dos organizaciones que siguen en la guerra-, buscan imponer. No es muy claro por qué se podría hablar de guerra civil entre los años 1965 y 1975. Si bien las FARC lograron conservar su inserción en ciertos sectores campesinos, sobre todo en las regiones de colonización, el ELN y el EPL tuvieron grandes dificultades para conquistar unas bases sólidas; el M 19, por su parte, nunca quiso dotarse de una implantación social permanente. Entre las clases medias revolucionarias y los campesinos, a veces radicalizados, la amalgama fue siempre muy precaria. A estos últimos, las huellas de la *Violencia* los ha obligado con frecuencia a desconfiar de nuevas aventuras armadas. El hecho cierto es que en ese momento las guerrillas seguían acantonadas en las zonas geográficas periféricas y nunca lograron golpear verdaderamente al régimen. En 1975, el ELN se encontraba prácticamente destruido, el EPL en pleno marasmo, las FARC estancadas en su crecimiento y el M 19 aún en proceso de gestación. Todos estos hechos nos muestran cuán inadecuado es el término de “guerra civil”.

Las dos guerrillas principales de la actualidad, las FARC y el ELN, conservan el mismo nombre que en el pasado, y entre sus cuadros se encuentran algunos de los que comenzaron la lucha hace varias décadas; aun así, no se parecen mucho a las guerrillas de los años sesenta, no solamente por los recursos de que disponen, sino por el privilegio que le confieren a la estrategia propiamente militar en detrimento de la conquista de bases sociales de apoyo. Entre los dos momentos se presenta el auge de la economía de la droga que ha modificado todo el panorama, desde el contexto político y social, hasta las características de la lucha armada.

El crecimiento de la economía de la droga y el nuevo contexto de la violencia

El auge de la economía de la droga comienza en los primeros años de la década del setenta. En un primer momento, Colombia se convierte en productora de marihuana y la exportación la llevan a cabo traficantes norteamericanos. En un segundo momento, Colombia se convierte en centro del tráfico de coca que proviene de Perú y Bolivia; su posición geográfica -tiene salida sobre los dos océanos- y su tradición en el contrabando, favorecen su función de intermediaria. Sin embargo, los traficantes colombianos logran controlar igualmente la comercialización al por mayor en el mercado norteamericano e, incluso, una parte del comercio al menudeo (es importante subrayar que lo esencial de los ingresos de la economía de la droga está ligado al transporte y la distribución en gran escala). Los cultivos de coca sobre suelo colombiano se desarrollan de manera paralela. Colombia, no obstante,

se mantiene durante largo tiempo como productor secundario con relación a Perú y Bolivia. Sin embargo, a comienzos de los años noventa Colombia agrega a su panoplia el cultivo de la amapola y la fabricación de la heroína. A partir de 1995 se produce un incremento cada vez mayor de los cultivos de coca, que substituyen las plantaciones de los otros dos países andinos sometidos a los planes de erradicación de los Estados Unidos. A partir de este momento Colombia se convierte en el primer país productor, a pesar de las campañas de destrucción de cultivos adelantadas en su territorio con el impulso, igualmente, de los Estados Unidos. La diferencia reside, entre otras cosas, en el poder de los actores armados ilegales, guerrillas y paramilitares, que en Colombia asumen la protección de los cultivadores.

El desarrollo de la economía de la droga modifica completamente el contexto de la violencia; no obstante solo tardíamente los dirigentes colombianos toman conciencia del hecho. No hay que olvidar que parte de los beneficios repatriados beneficia la economía en su conjunto y permite a Colombia enfrentar mejor que otros países del subcontinente -incluyendo a Chile- la “década perdida”. Los gobiernos colombianos no tuvieron mayores problemas al principio para tomar medidas que facilitaran el blanqueamiento de estos dineros, dando así un impulso considerable a la mayor parte de los sectores de la actividad económica, particularmente a la construcción y a la ganadería.

Solo con la aparición del terrorismo en gran escala desplegado por el cartel de Medellín a partir de 1984, pero sobre todo entre 1987 y 1993, como respuesta a las decisiones de extradición, los dirigentes colombianos comprenden la naturaleza de la nueva situación. Lo que las guerrillas no habían alcanzado, hacer tambalear el régimen, los traficantes lo logran sin dificultad. Suficiente sería con recordar que cuatro candidatos a las elecciones presidenciales de 1990, entre ellos el favorito Luis Carlos Galán, fueron asesinados, al igual que un gran número de magistrados, periodistas y policías.

El terrorismo, sin embargo, no es más que uno de los componentes del impacto que producen los traficantes; otro, no menos considerable, es la generalización de la corrupción; el otro cartel de los años noventa, el cartel de Cali, se convirtió en gran especialista en este método. Todas las instituciones se vieron afectadas por la corrupción: la justicia, las fuerzas armadas, la policía pero, sobre todo los partidos y las instituciones políticas. Es probable incluso que, aun sin este factor, los partidos tradicionales no hubieran podido evitar una crisis profunda debido a su deterioro; pero, de todas maneras, la corrupción ha significado de hecho su dislocación y el descrédito total del Congreso. Como bien se sabe un presidente, Ernesto Samper, acusado de haberse beneficiado en su campaña de los dineros del cartel de Cali, cumplió con su mandato en una especie de interinidad permanente.

En síntesis, la economía de la droga ha generado un proceso de desinstitucionalización. La cuasi parálisis del aparato judicial, que se traduce por un nivel escandaloso de impunidad (tan sólo el 3% de los homicidios dan lugar a una condena judicial efectiva) es el mejor indicador de esta situación.

Pero eso no es todo. La economía de la droga también ha trastornado por completo los valores y las estructuras sociales. En las ciudades, ha favorecido la conformación de organizaciones juveniles y la aparición de *sicarios*, bandas, milicias, y grupos criminales que han encontrado en el crecimiento de la economía ilegal, y en el éxito de los narcotraficantes, el estímulo para una carrera ascendente y la conquista de poder; en pocos años estas organizaciones han logrado controlar la mayor parte de la población de los barrios populares. En las zonas rurales, además de la depredación de las zonas de cultivo, la economía de la droga ha producido una concentración masiva de las mejores tierras en manos de los narcotraficantes que han adquirido alrededor de 4 millones de hectáreas y provocado, de esta manera, lo que algunos autores han llamado una verdadera “contra-reforma agraria”.

Las viejas jerarquías sociales se han resquebrajado. La droga ha permitido el ascenso de algunos y ha significado la caída de otros. En las familias y en las actividades más tradicionales, muchos han sido tentados por la aventura. Esta movilidad social rápida, sobre la base del mantenimiento de las desigualdades, ha contribuido a la crisis de los antiguos marcos de referencia. La opinión, finalmente, se ha visto muy desamparada frente al problema de la droga. Contra los que ven en la droga una burla a los países “centrales” se oponen los que temen sus consecuencias para Colombia. Los debates ilustrados sobre la parte de responsabilidad que recae sobre las naciones consumidoras o sobre las naciones productoras han enmascarado, con mucha frecuencia, el hecho de que la vida institucional del país en su conjunto ha estado en un proceso de descomposición.

La confrontación armada

El conflicto armado ha cambiado igualmente de carácter debido a los recursos que la economía de la droga ha puesto a disposición de los protagonistas ilegales. Las FARC han sido sus primeros beneficiarios; controlan las zonas del Amazonas donde se han implantado los cultivos y, cuando no lo logran, hacen todos los esfuerzos posibles por asegurar su dominio. Su presencia, por lo demás, ha contribuido a la expansión de la producción y el tráfico, en la medida en que ofrecen protección contra eventuales acciones de la fuerza pública; esta situación se ha acentuado en los años recientes durante los cuales las FARC han permitido el desplazamiento y el aumento de los cultivos, a pesar de todas las medidas de erradicación. Bajo su égida, igualmente, se ha desarrollado, al final de los años noventa, el cultivo de la amapola. Si bien se niegan a reconocer su participación directa en el tráfico y solo aceptan la responsabilidad por la imposición de un impuesto a los productores y a los traficantes, el hecho cierto es que favorecen la implantación en sus territorios de grandes plantaciones, laboratorios y pistas de aviación y están, por lo tanto, mucho más implicadas de lo que dicen estar. Las otras guerrillas, ciertamente, se han asociado a esta actividad en menor medida. No obstante, el M-19 y el EPL obtuvieron de esa misma fuente parte de sus recursos

de financiamiento; y el ELN, que durante mucho tiempo ha declarado no tomar parte en el negocio, ejerce hoy en día control sobre diversas zonas de cultivo.

Los grupos paramilitares, por su parte, han mantenido casi siempre relaciones con el tráfico de drogas. La creación de muchos de ellos en los años ochenta, cuando no se trataba más que de grupos dispersos, se debe a la iniciativa o al concurso de traficantes vinculados con el cartel de Cali o con organizaciones similares. Entre los años 1993 y 1994, ya con un carácter nacional y nuevas formas de coordinación, la financiación se sigue llevando a cabo de manera amplia sobre la base de la droga, a través de las contribuciones de traficantes, activos o reconvertidos a otras actividades, pero también se hace cada vez más a través del control de las zonas de cultivo. Su principal dirigente, por lo demás, ha reconocido recientemente que el 70% de sus recursos proviene de dicho control.

Al permitir a los protagonistas armados ilegales la compra de armas en los mercados internacionales de venta y el reclutamiento de miembros de manera continuada, la economía de la droga ha jugado un papel esencial en el ascenso del conflicto armado. Otras fuentes de financiamiento, desde luego, han contribuido desde el comienzo de los años noventa al avance de las guerrillas. El ELN ha resurgido de sus cenizas gracias a las contribuciones impuestas a las compañías petroleras, con el resultado de que todas las demás fuerzas guerrilleras, siguiendo su ejemplo, han desplazado sus frentes hacia los principales centros de producción minera y agrícola del país. Desde finales de los años ochenta, no existe uno sólo de estos centros que se encuentre al abrigo de las exacciones de los actores armados. La propia industria está sometida, desde entonces, a las mismas presiones.

La última forma de obtención de recursos, el secuestro, merece una mención aparte. Todas las fuerzas guerrilleras lo practicaron durante los años ochenta. Pero las FARC y el ELN han incrementado recientemente el uso de este medio; se estima que dichos grupos son los responsables de la mitad de los tres mil secuestros anuales constatados; los demás se atribuyen a la delincuencia común. Por lo demás, la colaboración entre guerrillas y delincuencia común para efectuar este tipo de operaciones no ha faltado; las primeras, por lo común, subcontratan con la segunda la primera etapa del secuestro, sobre todo en las ciudades, y se reservan para sí la negociación posterior del rescate. Estos actos, que no respetan a los niños ni a las personas ancianas, están lejos de afectar solamente a las personas adineradas. Se estima que los tres rubros (droga, extorsiones diversas y secuestros), proporcionan cada uno hoy en día una tercera parte de los recursos de las guerrillas.

De esta manera, desde 1980, las guerrillas han redefinido por lo alto sus ambiciones. El M-19 impulsaba en ese momento grandes operaciones militares. En 1982 las FARC adoptaron un plan para apoderarse del poder en ocho años. El ELN extendía sus dominios y comenzaba a incrementar los sabotajes contra las instalaciones petroleras. El EPL reforzó su influencia sobre el estratégico polo de Urabá, centro de producción de banano y punto de pasaje hacia Panamá y los dos océanos.

No obstante, el gobierno de Belisario Betancur establece en 1982 negociaciones

con las guerrillas, que desembocan dos años después en un cese del fuego de todas las organizaciones guerrilleras, excepto el ELN. Rápidamente fue evidente que en dichas negociaciones las guerrillas solo veían una forma de extender su influencia y que los militares las aceptaban a su pesar. En todo caso, el gobierno no era consciente del impacto de la economía de la droga sobre el conflicto armado y, desde 1985, las hostilidades progresivamente se reiniciaron. Estas hostilidades estarán notablemente marcadas en noviembre de 1985 por el episodio trágico de la ocupación del Palacio de Justicia por el M 19⁶. El gobierno siguiente, de Virgilio Barco, insiste de nuevo en las negociaciones y, al aceptar la convocatoria de una asamblea constituyente, permite al M 19, al EPL y, posteriormente, a otras pequeñas organizaciones de menor importancia, deponer las armas. Por el contrario, los diálogos emprendidos con las FARC y con el ELN se malogran en 1992.

La guerra toma entonces otra dimensión. Las FARC y, en menor medida, el ELN han seguido extendiendo desde entonces su control territorial. Las FARC mantienen sus bastiones en el Amazonas, al sur del país, pero comienzan poco a poco a implantarse en las regiones económicas más productivas y en los corredores estratégicos, como el valle del Magdalena Medio o la zona de Urabá, donde impulsan un combate sin piedad para desalojar a los antiguos guerrilleros del EPL. El ELN, mucho menos poderoso en términos militares, consolida sin embargo su presencia en la región del Magdalena y en la parte oriental de Antioquia.

Durante los años 1995-1998 todo se sacude. Sacando provecho de la debilidad del presidente Samper, colocado en situación desesperada debido a la actitud de los Estados Unidos que le retiran incluso la visa como consecuencia de las condiciones de su elección, las FARC impulsan operaciones militares de una envergadura sin precedentes, que comprometen en ocasiones cerca de un millar de combatientes en una misma operación, y alcanzan a producir una serie de dolorosos golpes a las fuerzas militares: se apoderan de varias guarniciones, destruyen un batallón de elite, toman centenares de prisioneros entre militares y policías -el número de prisioneros sobrepasa actualmente los quinientos-. En resumen, estos actos muestran que las FARC son capaces de ir mucho más allá de la clásica guerra de guerrillas.

Las Fuerzas Armadas dan muestras de estar muy poco preparadas para hacer frente a tales ofensivas. Si bien están conformadas por cerca de ciento treinta mil hombres, sólo treinta mil son capaces de participar efectivamente en la lucha antiguerrillera, es decir, apenas el doble del número de guerrilleros; el presupuesto militar, anteriormente uno de los más pequeños de América Latina, si bien crece desde 1991, no resulta suficiente para adquirir un armamento apreciable en helicópteros y medios de observación que los Estados Unidos, condenando sus alianzas con los grupos paramilitares, sólo suministran a cuentas gotas.

⁶ El M 19 pretendía organizar un juicio público contra el presidente Betancur. En condiciones totalmente improvisadas, las Fuerzas Armadas retomaron el Palacio. El balance final será de más de cien muertos, entre los cuales se encuentran la mitad de los magistrados de la Corte Suprema y una parte de los miembros del Consejo de Estado.

En estas condiciones, las organizaciones paramilitares son las que soportan de hecho lo esencial de la lucha antiguerrillera. Hemos visto que a partir de 1994, estos grupos adoptan el nombre de “Autodefensas Unidas de Colombia” y organizan un comando más o menos centralizado aunque su unidad, de hecho, ha sido sólo relativa y muchos de los grupos que las forman actúan por su cuenta. Sin embargo, las Autodefensas cuentan con el apoyo de numerosos sectores: además de los militares, que en ocasiones les dan apoyo logístico y cierran con frecuencia los ojos frente a sus operaciones, numerosos agricultores y comerciantes rurales contribuyen a su financiamiento y una amplia gama de otros sectores sociales -incluso algunos de los sectores más pobres- se adhieren a ellos en un intento por sustraerse a la presión de las guerrillas. Sin escatimar en la utilización de los medios más atroces, en particular las masacres sistemáticas contra las poblaciones sospechosas de simpatizar con las guerrillas, las Autodefensas extienden cada vez más sus acciones militares. Del departamento de Córdoba, que se encuentra prácticamente bajo su control, pueden pasar a la región del Urabá, donde arrebatan el control a las FARC, y después al Magdalena Medio, donde recuperan cada vez más las posiciones del ELN; pero también atacan las demás regiones controladas por las FARC, incluidas las zonas de vieja implantación. De esta manera logran implantarse tanto en el Meta como en el Putumayo, en el sur de Colombia. En numerosos casos esta implantación corresponde a las zonas de cultivo de coca, y uno de los intereses comprometidos en la confrontación es precisamente garantizar el control de estos recursos. Existe también el interés de hacer sentir su amenaza sobre el conjunto de la población que los paramilitares, a través de sus incursiones por todo el territorio, están a punto de lograr.

La apertura de nuevas negociaciones en 1998 no ha impedido que las confrontaciones continúen en una escala mayor. Los militares, dotados ahora de medios de observación modernos suministrados por los Estados Unidos, han logrado producir pérdidas considerables a las guerrillas y obligarlas a volver a las técnicas clásicas de la guerra irregular. Los paramilitares acrecientan sus acciones en el sur del país y en la zona limítrofe con Venezuela. Las FARC adelantan operación tras operación para recuperar la zona de Urabá y controlar los corredores estratégicos que conducen hacia el Pacífico. Sólo el ELN se encuentra militarmente en dificultades y cede cada vez más terreno a los paramilitares y a las FARC, las cuales han atacado en muchas ocasiones algunos de sus frentes; sin embargo, esto no les impide multiplicar los sabotajes, que logran paralizar con frecuencia las exportaciones de petróleo y amenazar toda la infraestructura eléctrica del país.

Pocos municipios rurales se encuentran hoy al abrigo de las incursiones de los distintos actores armados. Muchas de estas poblaciones -volveremos sobre ello- se encuentran en medio del fuego. Las ciudades -incluidas las principales metrópolis- cuyos barrios populares se encuentran desde hace cierto tiempo sometidos a la violencia de las bandas juveniles, ya no pueden escapar completamente a los efectos de la confrontación armada. Las guerrillas, y algunas veces los

paramilitares, se encuentran instaladas en los alrededores de Bogotá, Medellín o Cali. Los dos campos enfrentados impulsan la creación de milicias populares en las zonas urbanas menos favorecidas que sirven como enlace para sus acciones. Algunas ciudades están divididas estrictamente por fronteras invisibles que corresponden a las áreas de influencia de los diversos protagonistas armados. Así ocurre en Barrancabermeja, ciudad de 250.000 habitantes y sede de la más importante refinería de Colombia, donde las FARC, el ELN, un núcleo del EPL que se negó a entregar las armas, paramilitares y militares se disputan los diversos barrios. Pero este caso no es en absoluto excepcional. Desde que las guerrillas, imitadas frecuentemente por la delincuencia común, se han dedicado a secuestrar pasajeros de las carreteras al azar de los retenes que instalan sobre las vías –lo que los colombianos designan como “pescas milagrosas”–, la situación de guerra se ha vuelto visible para el conjunto de la población.

Por lo demás la guerra se libra en lo esencial por población civil interpuesta. Los enfrentamientos directos entre guerrillas y paramilitares son relativamente raros. Para extender su control territorial, los paramilitares recurren sistemáticamente a las masacres para provocar el terror de los habitantes de las zonas de guerrilla y obligarlos a huir o adherirse. Aunque con frecuencia pretenden convertir en objetivo sólo a los simpatizantes –llegan con listas de las personas que van a ejecutar–, la distinción entre los simpatizantes y los que se limitan a someterse a la coerción es ampliamente arbitraria. Las guerrillas, por su parte, si bien llevan a cabo menos masacres, cometen numerosos asesinatos, no vacilan en destruir poblados para castigarlos por sus contactos con el otro campo y despliegan todo un arsenal de medidas de intimidación.

Una violencia prosaica

Leer la confrontación colombiana a partir de un esquema de análisis clásico, colocando de un lado las fuerzas conservadoras y del otro unas fuerzas que representarían la voluntad de transformación de la sociedad, conduce a ignorar los nuevos aspectos del enfrentamiento. Lo que era válido para los años sesenta se aplica cada vez menos a la situación presente. No hay duda de que los sentimientos de humillación heredados de la *Violencia*, y la injusticia frente a las desigualdades patentes, se encuentran siempre presentes como trasfondo; sin embargo, no determinan necesariamente la adhesión a uno u otro campo ya que ésta se produce cada vez más como resultado del azar o de la coerción. Además, el colono que cultiva la coca se parece muy poco al campesino tradicional.

El carácter de la confrontación se sigue transformando y, actualmente, se encuentra cada vez más cerca de los conflictos de la postguerra fría, en los que los actores se apropian de una parte de los recursos de un país, se distancian de los movimientos sociales que tuvieron que ver con su nacimiento, mantienen un pie en un medio local y otro en las redes de la economía ilegal internacional, construyen

un poder militar que no se reconoce como un orden político aceptado. A pesar del mantenimiento eventual de una retórica ideológica, se trata de conflictos fundamentalmente prosaicos. Prosaica, la violencia colombiana lo es por múltiples aspectos: interferencias complejas entre sus actores, conversión de la acción armada en un mercado de trabajo, autonomización de la estrategia militar, reemplazo de la palabra por el terror.

La violencia colombiana no es solamente el efecto de la oposición entre dos campos. Hay otros actores que disponen de capacidad militar y mantienen su autonomía con relación a dichos campos. La división entre campos tampoco impide las transacciones y los acomodamientos entre los dos lados. Los narcotraficantes son, sin duda, protagonistas esenciales, que intervienen en función de sus intereses más que de un proyecto político pero que interfieren con todos los otros actores. En una menor medida los grupos armados urbanos tienen también su propio campo de acción. La propia confrontación armada no puede ser reducida a un “cara a cara” entre dos campos. Aunque los militares les prestan con frecuencia su apoyo, los paramilitares se han emancipado de la influencia del ejército y están, cuanto menos, igualmente influenciados por diversos grupos civiles con intereses. Las dos guerrillas están lejos de tener una unidad. En la medida en que manejan una gran parte de la producción de coca, les es indispensable establecer relaciones con los narcotraficantes, aun cuando estos últimos sostengan en otras regiones relaciones con los paramilitares.

La violencia se ha convertido en el soporte de un verdadero mercado de trabajo. Esto es evidente en las periferias urbanas, donde la inserción en las redes armadas es una condición de acceso a un status y a unos ingresos. La relación con las guerrillas o los paramilitares no es diferente, en gran medida, y la adhesión a unos u otros es con frecuencia circunstancial, pues depende del lugar de residencia, de las retribuciones prometidas o de las perspectivas de organización; pero no de trayectorias anteriores diferenciadas. Sin duda el odio y el deseo de venganza que siguen a la muerte de familiares y amigos determinan cada vez más las elecciones, pero éstas se distribuyen por igual entre los dos campos. Por lo demás, para percibir el carácter arbitrario que preside las afiliaciones sería suficiente con señalar que las bandas y las milicias de Medellín, influenciadas anteriormente por las guerrillas, se encuentran ahora captadas por los paramilitares; que no es raro el caso de las familias en que los hijos se vinculan a campos diferentes; o, incluso, que antiguos guerrilleros constituyen una gran parte de los efectivos paramilitares.

Disponer de cuantiosos recursos financieros ha permitido a las guerrillas y a los paramilitares definir su estrategia militar sin tener necesidad de preocuparse por la opinión de la población. Las FARC, y el ELN disponen, ciertamente, de algunos bastiones históricos. Por lo demás, todos los protagonistas armados logran obtener algún apoyo desde el momento en que son capaces de garantizar de manera estable una función de protección o de regulación. Sin embargo sus avances territoriales se han llevado a cabo en estos últimos años en función de objetivos tácticos que,

lejos de articularse con una movilización previa de los habitantes, se han apoyado casi siempre en la coerción.

En fin, las bellas proclamas ideológicas pertenecen al pasado. La prioridad es ahora marcar fronteras en el espacio y, por este motivo, el recurso al terror reemplaza con creces la palabra; son los muertos los que marcan los límites de los territorios, que cada vez se definen menos por antiguas propiedades materiales y sociales y han adquirido el aspecto de simples nudos entre redes invisibles de amenazas.

Las guerras prosaicas no producen un imaginario que tome la forma de una visión dicotómica del mundo en términos de “amigos-enemigos”. Esta visión existe, ciertamente, entre los combatientes y las víctimas, pero tiende a refractarse en función de los lugares y de los momentos sin que nunca llegue a estabilizarse verdaderamente; la voluntad de venganza puede sustentarla, pero puede también conducir a comportamientos que no tienen nada en común con ella. La violencia colombiana produce efectivamente un imaginario, pero que remite al caos, a la confusión, a la imposibilidad de inscribir los acontecimientos en una trama de inteligibilidad. No hay nada de sorprendente cuando se constata que muchos crímenes nunca son reivindicados. La banalización de los secuestros y los crímenes “anónimos” representan bastante bien el aspecto que ha tomado la confrontación. El hecho de que en muchísimos casos los investigadores y la opinión tengan tal diversidad de argumentos para atribuirlos a uno u otro campo es testimonio suficiente de la confusión que resulta de la pluralidad de protagonistas y de las dimensiones de la violencia.

En realidad, no resulta exagerado afirmar que, hasta el momento, lo que el conjunto de los protagonistas ha hecho es un intento de tomar como rehén a la sociedad. Si es impropio hablar de “guerra civil” en los años sesenta, no lo es menos utilizar este término para caracterizar la situación actual. Y esto simplemente porque la inmensa mayoría de la población no se identifica con ninguno de los protagonistas y busca desesperadamente la manera de sustraerse a los efectos de la violencia. En la medida en que un porcentaje considerable de la población se encuentra sometida por redes que imponen su control por el terror, estamos frente a una especie de secuestro masivo. ¿Es un azar acaso que, al lado de la rutinización de las masacres, la rutinización de los secuestros aparezca como uno de los rasgos propios de la violencia colombiana; o que, en el momento en que las FARC deciden promulgar “leyes” con el fin de hacer explícito su estatuto de Estado paralelo, escojan inaugurar esta actividad legislativa con un texto que anuncia el secuestro de empresarios que no acepten pagar el “impuesto revolucionario”? El vanguardismo ideológico es reemplazado de esta manera por la coerción sobre los cuerpos y los territorios.

Conclusión

Todo sugiere que Colombia ha llegado a un momento decisivo. O bien los protagonistas se comprometen seriamente en la vía de la negociación, o bien se produce un mayor agravamiento de la guerra, que podría desembocar verdaderamente en una guerra civil.

Las negociaciones en que se ha comprometido el gobierno desde hace dos años no han tenido hasta el momento un resultado tangible. En este marco el gobierno ha entregado a las FARC, de entrada y sin ninguna condición, una zona “desmilitarizada”, es decir, donde el ejército se ha retirado pero donde la guerrilla puede libremente desplegar sus fuerzas. Si bien las dos partes han definido de manera común una lista de temas de discusión, no han llegado hasta el momento a ningún acuerdo sustancial y las FARC se han negado a abordar el problema de la humanización de la guerra. Se trataría de llegar, precisamente, a un eventual cese del fuego pero, a menos que sean aportadas garantías, incluida una verificación internacional, no se ve claro como podría ser durable. Las conversaciones con el ELN tienen aún mayores dificultades. Esta organización reclama por su parte una zona desmilitarizada pero, aunque el gobierno ha aceptado la propuesta, ha sido incapaz de ponerla en práctica y la población de la zona ha organizado protestas masivas con el apoyo de los grupos paramilitares.

La adopción del Plan Colombia por parte de los Estados Unidos amenaza con producir una escalada de la guerra. La ayuda militar que va a ser entregada a las fuerzas armadas está destinada teóricamente, de manera exclusiva, a incrementar las medidas de erradicación de los cultivos de droga. Sin embargo, es evidente que esta ayuda significa también una contribución a la lucha antiguerrillera ya que las guerrillas controlan una parte amplia de esos cultivos y se verían privadas de una porción importante de sus ingresos si la erradicación llegara a tener éxito. Las experiencias anteriores, no obstante, invitan a dudar de que se alcance este resultado, ya que hasta el presente las medidas de erradicación sólo han logrado el desplazamiento de los cultivos y ahora los paramilitares se encuentran completamente implicados en esta actividad. Si bien el problema de la droga es, sin lugar a duda, inseparable del problema de la paz, su solución ciertamente va por otra vía, como es el compromiso masivo de la comunidad internacional en una política de sustitución de cultivos, que no sería más que el reconocimiento de hecho de que esta comunidad internacional tiene su parte de responsabilidad en el desarrollo del comercio ilegal, de las redes de lavado de dinero y del tráfico de armas, que son la otra cara de la economía de la droga.

Todos los protagonistas parecen estar preparándose para la escalada. Antes de que la ayuda norteamericana llegue, todos están decididos a modificar la situación en su provecho. Las FARC reclutan con gran empeño y adquieren armas en grandes cantidades -el presidente del Perú, Fujimori, acaba de revelar que diez mil fusiles han transitado recientemente por el Perú y les han sido entregados-. Los paramilitares

amplían sin cesar sus efectivos y sus posiciones. Las fuerzas armadas parecen prepararse para acciones de envergadura.

Lo más preocupante es que tal escalada podría arrastrar una polarización de la sociedad que, hasta el presente, ha sido muy parcial. Los dos campos intentan provocar esta polarización atacando a las organizaciones de la sociedad civil que pretenden conservar una posición independiente y construir espacios de paz. Prestigiosos universitarios y numerosos responsables de ONG's han sido asesinados en 1999, en lo que parece ser una estrategia compartida para golpear todos los espacios de opinión. Al mismo tiempo, los paramilitares y las guerrillas hacen todo lo posible por afianzar su dominio sobre la sociedad. Los primeros parecen estar conquistando para su visión a una franja importante de la sociedad, tanto entre las clases privilegiadas como entre las clases medias y populares. Las guerrillas, por su parte, tratan de convertir su presencia territorial en un poder político, obligando al personal político local a aceptar sus directivas; para lograrlo, multiplican los asesinatos y los secuestros de candidatos a puestos públicos; ante la imposibilidad de convencer buscan someter. En fin, la crisis económica sin precedentes que afecta a Colombia desde 1998, que se ha traducido por una recesión más pronunciada que la de los años treinta y por la presencia de tasas de desempleo declaradas de más del 20%, acrecienta aun más la descomposición del tejido social y la carencia de legitimidad de las instituciones.

La evolución hacia una guerra de mayor amplitud, incluso hacia una guerra civil, no puede, pues, ser descartada; su desarrollo no tendría otro resultado que producir una devastación aun más considerable, y no se ve claro como uno de los protagonistas actuales podría salir ganando.

Las negociaciones son, pues, la única vía posible, Sin embargo no hay que alimentar ilusiones. Las negociaciones sólo pueden ser largas y difíciles. El hecho de que las FARC pretendan discutir de igual a igual con el Estado da una idea de los desafíos que hay que enfrentar. Los paramilitares tienen los medios para desestabilizar en todo momento el proceso. Debatir acerca de las transformaciones sociales necesarias es sin duda útil pero, de igual manera, sería ingenuo pensar que una eventual solución política pondría de inmediato fin a la violencia. Los rencores, el deseo de venganza, la desorganización social se encuentran aun muy arraigados en la población como para que se puedan apaciguar fácilmente.